

C.A. de Santiago

Santiago, treinta de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que recurren de protección Francisca María Fernández Droguett, María Jesús de Los Ángeles Martínez Leiva, Maite Cecilia Birke Abaroa y Anthony Lawrence Prior Carvajal en contra de la sociedad Alto Maipo SpA, representada por Luis Knaak, por el acto arbitrario e ilegal consistente en ejecutar una operación de espionaje en contra de los recurrentes, por medios y con objetivos ilegales, lo que vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política de la República.

Señalan que el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, de la filial chilena Aes Andes, está emplazado en la comuna de San José de Maipo, sin embargo, desde sus inicios en el año 2007 ha existido una férrea oposición de los habitantes de la comuna y de la Región Metropolitana, por cuanto, entre sus aspectos más complejos se encuentra la construcción de un túnel de 70 kilómetros que vulneran áreas protegidas Monumento Natural El Morado y los glaciares San Francisco y Morado. Incluso se indicó por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, en su momento, que el proyecto constituía una amenaza a la seguridad y calidad del abastecimiento de agua potable de Santiago.

Sostienen que, en ese contexto, los recurrentes forman parte del movimiento surgido para el rechazo de la construcción. Así, María Jesús Martínez y Anthony Prior, quienes pertenecen a la Red Metropolitana No Alto Maipo, realizaron denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Por su parte, la recurrente Maite Birke, dedujo una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental con el objetivo de declarar ilegal la resolución que aprobó el programa de cumplimiento de Alto Maipo, la que aún se encontraría sin sentencia firme.

En consecuencia, son personas con una participación intensa y constante en los movimientos ambientalistas y de los derechos humanos y han intervenido de distintas maneras en la defensa de las



comunidades y los territorios aledaños a la cuenca del Maipo, zona especialmente afectada por la instalación del proyecto energético de AES Andes S.A.

Refieren que Francisca Fernández Droguett es una figura pública, caracterizada por su actividad académica, política y comunitaria, con un fuerte vínculo al movimiento social y sus organizaciones; por su parte Anthony Lawrence Prior Carvajal, es habitante de la comuna de San José de Maipo. Presidente del Comité Ambiental Comunal Cajón del Maipo, Vocero de la Red Metropolitana No Alto Maipo, Director Ejecutivo de la Fundación de Desarrollo Sostenible Cajón del Maipo y desde 2021 integra el Comité Ejecutivo del Programa Estratégico Regional Andes Santiago; a su turno, Maite Birke Abaroa es comunicadora social y ceramista, y fue concejala de la misma comuna por dos periodos; y finalmente María Jesús de Los Ángeles Martínez Leiva, es Licenciada en Geografía de la Universidad de Chile y ha aportado a la oposición al proyecto Alto Maipo desde el año 2012 en la Coordinadora y luego como apoyo técnico de No Alto Maipo desde finales del 2014, desempeñándose desde el 2015 como una de las voceras de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares

Señalan que el 8 de noviembre de 2021, el medio de comunicación digital denominado Interferencia publicó un reportaje periodístico relacionado con “servicios de cyberinteligencia” encargados por la empresa AES Andes S.A., accionista mayoritaria de la sociedad Alto Maipo S.P.A, que es la responsable del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo SpA. En dicho reportaje se denuncia la existencia de informes de ciber- inteligencia encargados por la empresa AES Andes S.A, propietaria del proyecto hidroeléctrico “Alto Maipo”, donde aparece información personal y sensible de las recurrentes..

En el reportaje se informa que “entre febrero y agosto de 2020, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de propiedad de la Empresa Andes S.A., invirtió \$3 millones de pesos mensuales en servicios de Ciberinteligencia”. Esos servicios incluían la presentación de informes semanales de posibles amenazas comunicacionales y operativa al

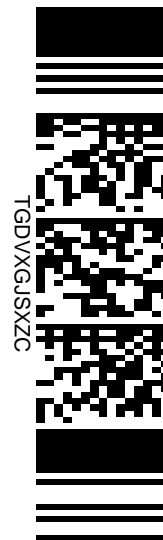


proyecto alto Maipo Señalan que el periódico accedió a once de esos informes a través de los cuales Alto Maipo recibía informes de lo que ocurría en relación a su proyecto, además de direcciones particulares, números telefónicos, el RUT y otras informaciones como como ocupación, pareja y antecedentes políticos de ambientalistas y opositores al proyecto.

Señalan que el informe de hallazgo del jueves 23 de abril de 2020 aparece destacado en el reportaje, y destacan que *“En el caso del informe de la semana del 13 de abril y bajo el subtítulo “Situación actual” figura información privada de cinco reconocidos opositores al proyecto”*. Agregan que el referido informe presenta una ficha individual dos de los recurrentes Anthony Prior Carvajal y María Martínez Leiva, además de una ficha para Maite Birke Abaroa. Todas las fichas fueron censuradas parcialmente por el periódico, en aquellas secciones que exhibe información sensible de las recurrentes.

Señalan que el contenido de los informes además dice relación con un análisis de los grupos. lo que ejemplifica con lo siguiente *“Existen grupos ambientalistas que operan bajo el marco legal. Otros que operan fuera de ese marco y otros desde ambas dimensiones. Estos 2 últimos grupos deberán ser parte del proceso de monitoreo y seguimiento constante que se debe realizar en la etapa de ejecución del PHAM como también en la puesta en operación, ya que eventualmente podrían realizar actos de “eco-terrorismo”*. Agrega el informe que existen infiltrados en diversos grupos que proporcionan información.

En cuanto al fundamento normativo del recurso, indican que las acciones denunciadas de espionaje, infiltración, vigilancia y obtención de datos, no sólo vulneran las garantías fundamentales, sino también la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y sostienen que la información aún sigue alojada en los registros de la empresa, lo que hace urgente la presentación de la presente acción judicial, con el fin de e logara la tutela inmediata del derecho a la privacidad sobre los datos y en especial al derecho a borrar dichos datos .



Atendido el mérito de lo expuesto, solicitan se reconozca quebrantado el derecho a la privacidad sobre los datos, se ordenen las medidas que permitan restablecer el imperio del derecho y se disponga la eliminación o cancelación de todo dato incorporado a los registros de la empresa y del investigador ilegal. Piden además que los recurridos informen todos los antecedentes relacionados con la actividad de espionaje. Y por último, que se ordene hacer cesar expresamente estas conductas de persecución, que significan una amenaza a la integridad psíquica de los recurrentes, condenado expresamente en costas a las parte recurridas.

SEGUNDO: Que, informa Pablo Ortiz Chamorro, en representación, de Aes Andes S.A., solicitando el rechazo del recurso, por ser falsas las imputaciones contenidas en el libelo recursivo.

Señala que su representada no encomendó la elaboración de los informes a los que hace mención el recurso deducido, ni tampoco ha contratado en favor de Alto Maipo SpA servicios de monitoreo de comunidades virtuales, puntualizando que los pagos efectuados al consultor a cargo de recopilar información acerca del proyecto Alto Maipo, no fueron de cargo de su parte.

Alega la falta de legitimación pasiva, toda vez que, si bien reconoce que su representada es accionista de Alto Maipo SpA, es una persona jurídica que posee ámbitos propios de gestión, agregando que si bien AES Andes evaluó ambientalmente y dio inicio a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, desde el año 2013 ya no es su titular, siendo desde esa época su propietario y administrador la sociedad Alto Maipo SpA.

Sostiene que el recurso carece de objeto y oportunidad, ya que su parte, no ha participado en la elaboración de los informes que dan origen a la acción deducida y su representada no posee ninguna clase de registro respecto a datos personales o privados referentes a los recurrentes, y además el recurso deducido y su petitorio tiene como único sustento una publicación de prensa que entrega información que no es efectiva, al dar como ciertas el desarrollo de actividades de



espionaje y seguimiento, lo que carece de todo asidero, con la consecuencia que el recurso no se sustenta sobre un derecho indubitado.

En cuanto a la falta de oportunidad, señala que la publicación efectuada data del 8 de noviembre de 2021, y a pesar de que el recurso se dedujo con fecha 8 de diciembre de ese año, su representada recién fue notificada con fecha 31 de enero de 2023, habiendo transcurrido más de un año sin que se haya dado lugar a esta gestión y sin que se hayan aportado nuevos antecedentes que den cuenta de que las presuntas labores de espionaje y persecución.

Niega la vulneración de derechos fundamentales, y a la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada, por cuanto los datos incorporados tanto en la noticia como en el informe no configuran de forma alguna datos sensibles pues tanto el nombre completo, como la cédula de identidad, el domicilio, la actividad laboral de los recurrentes, sus mails y teléfonos constan, sin excepción, en fuentes de libre acceso público, y obtenible de manera gratuita. Incluso -dice- algunos de esos datos fueron aportados por los propios recurrentes a la hora de efectuar presentaciones ante Tribunales.

Atendido el mérito de lo expuesto, solicita rechazar en todas y cada una de sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Informa Norberto Tercero Corredor Díaz en representación de Alto Maipo Spa, solicitando el rechazo del recurso.

Como primer argumento, sostiene que es efectivo que Alto Maipo contrató un servicio de seguimiento de redes y recopilación de información pública dentro del marco legal, atendido que el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo es un proyecto de alta connotación pública que genera las más diversas reacciones, entre las que se encuentran manifestaciones públicas de apoyo y rechazo, entre otras, a través de distintas redes sociales y foros de internet. Dentro de este contexto, y ante la situación de inestabilidad socio-política, amenazas, y constantes ataques e incertidumbre que se encontraba en dicho momento, Alto



Maipo SpA tomó la decisión de contratar servicios para poder realizar un seguimiento de reacciones en redes sociales con la finalidad de poder alertarse y eventualmente prevenir potenciales acciones dañosas y/o atentados de carácter violento.

Agrega que dentro de la búsqueda de dichos servicios, la empresa Felipe Jaque Zamora Asesoría y Consultoría en Computación, Informática y Tecnología E.I.R.L efectuó a Alto Maipo una propuesta de servicios, cuyo objeto consistió en monitorear un conjunto de palabras claves más usadas y concurridas por los internautas, accediéndose solamente a datos e información pública, de libre acceso y que no requiriese intercambio pecuniario para obtenerla, obligándose a emitir informes con los hallazgos que se encontraran, excluyéndose cualquier tipo de análisis, evaluación e interpretación de los datos suministrados.

Aclara que en caso alguno se solicitó acceso ni procesamiento de información de carácter privado de alguna persona, siendo toda la información requerida de carácter pública y de libre acceso. Indica que el contrato tendría una duración inicial y fija de seis meses, pudiendo renovarse tácitamente.

Manifiesta que, si bien el prestador emitía informes, en éstos se entregaba información básica sobre notas de prensa relativas al proyecto y otra información que no guardaba relación alguna con el proyecto,

Señala que, atendido que los informes no eran de utilidad por contener solamente notas de prensa, información desactualizada, de carácter conspirativo y que no guardaba relación alguna con Alto Maipo, es que se le restó relevancia a su entrega y no se renovó el contrato más allá del periodo inicial. Sin embargo, cuando esto le fue comunicado a la sociedad prestadora de servicios, el consultor comenzó a subir el tono en el contenido de los informes, aludiendo en ellos a información que podría poner en riesgo la seguridad del proyecto”, lo que obligaría a “reforzar la seguridad corporativa”, justificándose “más que nunca seguir monitoreando las distintas comunidades digitales”.



A raíz de lo anterior, Alto Maipo comunicó formalmente al prestador de servicios mediante correo electrónico y carta de fecha 3 de agosto de 2020, su decisión de no renovar el plazo del contrato por los servicios prestados.

Argumenta que los actos desarrollados por su representada no son ilegales o arbitrarios por cuanto lo único que ha realizado es el ejercicio legítimo de la contratación del servicio de seguimiento en redes sociales y obtención de información pública acerca de reacciones que pudieran permitir identificar información negativa respecto del proyecto Alto Maipo y eventualmente prevenir la comisión de eventuales acciones dañosas y/o atentados de carácter violento para denunciarlas a las policías y el Ministerio Público, como consta en la cláusula segunda letra b) y c) del contrato. En particular, pidió “testear y monitorear un conjunto de palabras claves en las comunidades virtuales”, estableciéndose en el contrato de prestación de servicios que el proveedor sólo podía acceder a los datos e información pública existente, principalmente en redes sociales y medios de comunicación, excluyéndose “cualquier tipo de análisis, evaluación e interpretación de los datos e información que el servicio suministre.

Indica que la información indicada se encuentra disponible en fuentes públicas accesibles libremente al público, e incluso fue compartida libre y voluntariamente por los recurrentes y las organizaciones de las que forman parte, por lo que en ningún caso es posible considerar su como un acto arbitrario o ilegal,

En otro orden, señala que la acción constitucional carece de urgencia, pues han sido los propios recurrentes quienes han demorado la tramitación de la presente causa y, en definitiva, han dilatado un pronunciamiento jurisdiccional en relación con sus garantías fundamentales supuestamente afectadas. Asimismo señala que el recurso ha perdido oportunidad, toda vez que se funda en un hecho que cesó hace casi tres años y para el cual no existe medida alguna que se necesite adoptar por esta Corte para restablecer el imperio del derecho.



Sostiene que el recurso se sustenta en un informe de terceros, supuestamente periodístico, que de su revisión no da cuenta actuar ilegal y/o arbitraria alguno cometido por Alto Maipo y que si bien el medio sostiene haber tenido acceso a once informes, solamente publicó uno de ellos. El cual no corresponde al informe recibido por Alto Maipo. al haber sido manifiestamente alterado.

Por último, niega la vulneración de garantías fundamentales, señala que el petitorio adolece de errores de forma que son insalvables y solicita el rechazo.

Considerando:

1º) Que el denominado recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se numeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

2º) Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3º) Que, igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal, en este caso los consagrados en el artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política de la República.

4º) Que el recurso de protección, como uniformemente lo ha señalado la jurisprudencia, por su propia naturaleza, en cuanto



mecanismo de emergencia, con un procedimiento rápido e informal, está destinado a solucionar problemas de evidente y actual infracción a derechos constitucionales.

5º) Que el hecho ilegal y arbitrario que motiva este recurso es que las empresas recurridas encargaron y obtuvieron informes de ciber inteligencia respecto de los recurrentes, en los que donde aparece información personal y sensible de las recurrentes, de lo que se enteraron a través un reportaje del medio electrónico “Interferencia”, en el que se denuncia la existencia de informes de ciber inteligencia encargados por la empresa AES Andes S.A, propietaria del proyecto hidroeléctrico “Alto Maipo”, donde aparece información personal y sensible de las recurrentes contenida en informes semanales de posibles amenazas comunicacionales y operativas al proyecto Alto Maipo. En particular, denuncian como ilegal y arbitrario el informe de hallazgo del 23 de abril de 2020 , en el que figura información privada de algunos de los recurrentes,

6º) Que la recurrida Alto Maipo SpA aceptó ser quien encargó los informes materia de este libelo, por lo que, siendo AES Andes una persona jurídica distinta, carece de legitimación pasiva en este recurso.

7º) Que, como lo ha reconocido la recurrida Alto Maipo SpA, con fecha 1 de febrero de 2020 contrató un servicio de servicio de monitoreo de comunidades virtuales en los 3 niveles de internet. Dicho contrato tenía por objeto, de acuerdo con su cláusula primera, *“testear y monitorear un conjunto de palabras claves en las comunidades virtuales de habla hispana existente en los 3 niveles de internet, mediante el uso de un conjunto de software y plataformas OSINT (Open Source Intelligence).”* Se acordó que la actividad sería en parte automática y manual y se realizaría en forma diaria de lunes a domingo, dejándose establecido que el proveedor sólo podría acceder a los datos e información pública existente en las redes sociales, entendiéndose como datos e información pública toda aquella que se encuentre de libre acceso y que no requiere de un intercambio pecuniario para obtenerla



8º) Que, revisado el informe de hallazgo de fecha 23 de abril de 2021, rolante a fojas 3 se aprecia que los “hallazgos” contenidos en el documento, tales interposición de acciones legales, realización de campañas en redes sociales, solicitudes a la autoridad ambiental y otros, fueron todos obtenidos de fuentes abiertas. En cuanto a los datos personales de los recurrentes, como RUT, domicilio y número de celular, además de su información biográfica, también son posible de ser obtenidos a través de fuentes abiertas.

9º) Que, sobre el particular, el artículo 2º letra I) la Ley N° 19.286, sobre Protección de Datos Personales señala que son fuentes accesibles al público, los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes, datos que para ser utilizados, no requieren autorización del titular cuando están contenidos en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a un grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento

10º) De lo anterior resulta que no es posible estimar la concurrencia en la especie de actos ilegales y arbitrarios de parte de la recurrida Alto Maipo SpA, que pudieren conculcar garantías protegidas constitucionalmente.

11º) Que, además de lo ya indicado, no existe medida alguna que adoptar por parte de esta Corte, pues los hechos contenidos en el recurso ocurrieron el año 2020, dejando de producir efectos una vez que, con fecha 3 de agosto de 2020, Alto Maipo SpA terminó su relación contractual con la empresa que la proveía de esa información.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se decide que **SE RECHAZA** sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Francisca María Fernández Droguett, María Jesús de Los Ángeles Martínez Leiva, Maite Cecilia Birke Abaroa y Anthony Lawrence Prior Carvajal.



Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad, si no se apelaré.

Redacción del Abogado Integrante señor Sebastián Hamel Rivas.

N°Protección-41487-2021.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez e integrada por la Ministra (S) señora Carolina Bustamante Sasmay y por el Abogado Integrante señor Sebastián Hamel Rivas. No firma la Ministra (S) señora Bustamante por haber terminado su suplencia.



Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Antonio Ulloa M. y Abogado Integrante Sebastian Ramon Hamel R. Santiago, treinta de junio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a treinta de junio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

